Boletín Oficial

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA.

Las leyes y las disposiciones del Gobierno son obligatorias para la capital de provincia desde que se publican oficialmente en ellas y desde cuatro días después para los demás pueblos de la misma provincia. (Ley de 3 de Noviembre de 1837.)

SUSCRICION PARTICULAR.

Un mes en Córdoba.	12 rs.	Id. fuera.	16 rs.
Tres id.	33		45
Seis id.	66		90
Un año.	132		180

Se publica todos los días excepto los Domingos.

Las leyes, órdenes y anuncios que se manden publicar en los Boletines oficiales se han de remitir al Gefe político respectivo por cuyo conducto se pasarán á los editores de los mencionados periódicos. (Reales órdenes de 6 de Abril de 1839, y 31 de Octubre de 1854.)

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

S. M. la Reina Nuestra Señora (q. D. g.) y su augusta Real familia, continúan sin novedad en su importante salud.

REALES DECRETOS.

En el expediente en que el Gobernador de la provincia de Sevilla ha negado al Juez de primera instancia del distrito de San Roman de la capital la autorizacion para procesar á los serenos Manuel Fernandez, Cayetano Cordero y Antonio Feliz, resulta:

Que en la noche del 3 de Febrero próximo pasado Juan Hospitales, vecino de Sevilla, llegó á su casa en estado de embriaguez; y promoviendo cue tion con Remedios Benitez, en cuya compañía vivia, la dió un empuellon, por cuyo motivo el casero mandó avisar al sereno de la demarcacion para impedir que Hospitales continuase escandalizando:

Que con tal motivo se presentó el sereno acompañado de otros dos, y le intimaron que les siguiese á la casilla de la prevencion en calidad de detenido, á lo cual se opuso Hospitales pretextando que debia conducirle al cuartel por ser soldado provincial:

Que habiendo advertido Hospitales que no le llevaban á su cuartel, rehusó seguir á los serenos, los cuales le dieron varios palos, causándole dos heridas contusas en la cabeza y varias otras contusiones en el cuerpo, por cuya razon hubo necesidad de trasladarle al hospital:

Que al instruirse por el Juzgado las oportunas diligencias en averiguacion de los hechos expuestos, declararon los serenos que habiendo no-

tado que Hospitales trataba de fugarse, le previnieron que moderase el paso; pero que lejos de obedecer, contestó con palabras injuriosas, dando á uno de ellos un bofetón y cogiéndole el chuzo lucharon hasta caer al suelo, donde se causó una lesion en la cabeza, y que habiendo acudido otro á separarlos, tambien se agarró con el, cayendo nuevamente al suelo, causándose otra lesion:

Que Remedios Benitez y otra mujer que presenció el hecho declararon que Hospitales queria que le condujesen á su cuartel, y que los serenos no le hicieron caso, apaleándole por que no andaba:

Que el Médico forense, que reconoció á Hospitales, expuso que las lesiones parecian causadas por golpe de palo ó otro instrumento analogo:

Que en su virtud el Juzgado solicitó la competente autorizacion para procesar á los serenos Manuel Fernandez, Cayetano Cordero y Antonio Feliz por creerlos autores de los delitos de detencion arbitraria y lesiones graves:

Que el Gobernador la negó, fundándose con el Consejo provincial en que el proceder seguido por los serenos no puede constituir el delito de detencion arbitraria, toda vez que el autor del escándolo, que no era conocido por ellos, habia contraido responsabilidad y no habia otra garantía de que no la eludiese que la de la detencion, y en que el hecho relativo á las lesiones no aparecia comprobado:

Visto el párrafo segundo de la regla 27 de la ley provisional para la aplicacion del Código penal, que dispone que los Jueces y Tribunales y las Autoridades y sus agentes están obligados á detener ó mandar detener á las personas que segun fundados indicios sean responsables de faltas, si fuesen desconocidas:

Visto el art. 343 del Código penal, que castiga como reo de lesiones graves al que hiere, golpee ó maltratase de obra á otro:

Considerando:

1.º Que los serenos debian evitar el escándalo promovido por Hospitales, sin que estuviera en sus atribuciones calificar el hecho de delito ó falta, por cuya razon cumplieron con su deber al tratar de conducirle á disposicion de la Autoridad competente:

2.º Que de las diligencias practicadas hasta ahora no aparece que respecto de las lesiones que los serenos causaron á Hospitales, concurren circunstancias capaces de eximirles de responsabilidad;

Conformándose con lo consultado por el Consejo de Estado en pleno,

Vengo en confirmar la negativa del Gobernador con respecto á la detencion arbitraria y conceder la autorizacion solicitada por las lesiones.

Dado en Palacio á diez y siete de Junio de mil ochocientos sesenta y seis.—Está rubricado de la Real mano.—El Presidente del Consejo de Ministros, Leopoldo O'Donnell.

En el expediente y autos de competencia suscitada entre el Gobernador de la provincia de Madrid y el Juez de primera instancia de Navalcarnero, de los cuales resulta:

Que D. Cirilo Bahía, en concepto de propietario de tres fincas próximas á la carretera en construccion desde Madrid á San Martin de Valdeiglesias, presentó ante el Juzgado de primera instancia de Navalcarnero querrela criminal de hurto contra don Angel Irraola y otros doce consortes porque, como representante el primero y operarios los demás de la empresa constructora, habian extraido piedra de las expresadas fincas y con destino á las obras sin consenti-

miento del dueño, y no obstante la oposicion que á nombre de este demostraron en diversas ocasiones los guardas y otras personas encargadas al efecto por el mismo propietario:

Que admitida la querrela, y practicadas las primeras informaciones, mandó el Juez unir al proceso testimonio de otro que en el mismo Juzgado se formó contra Miguel Alcoy y Alfonso Aparicio por hurto de piedras en fincas del mismo D. Cirilo Bahía ántes citado, de cuyo testimonio aparece que al comenzar el procedimiento criminal el Gobernador de la provincia de Madrid requirió de inhibicion al Juez por tratarse de un asunto referente á las condiciones de un contrato de obras públicas, cuyo conocimiento era peculiar de la Administracion; y que estimado por el Juez el requerimiento, dictó auto de inhibicion, conforme con el dictámen del Promotor fiscal:

Que fundado el Juez en estos antecedentes, y de conformidad tambien con el Promotor fiscal, dió providencia inhibiéndose del conocimiento de la nueva causa promovida por Bahía, el cual, luego que tuvo conocimiento de ello, apeló ante la Audiencia del territorio, que dejó sin efecto la inhibicion acordada:

Que en este estado, y cuando el Juez se hallaba prosiguiendo las actuaciones en cumplimiento de lo mandado por el Tribunal superior, le requirió de inhibicion el Gobernador de la provincia de Madrid á instancia del contratista de las obras de la carretera de que se ha hecho mérito, fundándose en que existe en el presente caso una cuestion previa administrativa, de cuya decision depende el fallo que hubiere de dictarse por los Tribunales en la causa criminal promovida por D. Cirilo Bahía, en razon á que hay necesidad de apreciar algunas de las condi-

ciones del contrato, relativas á los materiales que habian de emplearse en las obras; siendo además notorio que la falta en que los procesados hayan podido incurrir es susceptible de correccion por parte de la Administracion, segun las Reales disposiciones vigentes que citaba:

Que comunicado el oficio de requerimiento al Promotor fiscal y á la parte querellante, opinó el primero que debia el Juzgado acceder á la inhibicion pretendida, y el segundo sostuvo la competencia de la jurisdiccion ordinaria, recayendo por fin providencia, en la que al tiempo que se desestimó la inhibicion solicitada por el Promotor fiscal, se mandó pedir al Gobernador su autorizacion para continuar los procedimientos contra D. Angel Iraola y consortes, debiendo consultarse esta providencia con el Tribunal superior ántes de su ejecucion:

Que la Audiencia confirmó el auto consultado en cuanto declaraba no haber lugar á la inhibicion, mandando devolver las actuaciones al Juzgado para que se limitase á sostener su competencia en la forma legal:

Que en su consecuencia dictó el Juez auto, en el que se limitó á mandar que se librase exhorto al Gobernador de la provincia, con insercion de los dos escritos del Ministerio público, del de la parte querellante y de la providencia del Tribunal superior, á fin de que la Autoridad administrativa dejase expedita la jurisdiccion ordinaria, ó de lo contrario tuviese por formada la competencia:

Que el Gobernador, conforme con el Consejo provincial, insistió en el requerimiento, añadiendo que no se consideraba en el deber de razonar nuevamente su pretension porque el Juzgado habia dejado de consignar los fundamentos de su determinacion contra lo expresamente dispuesto en el reglamento de 25 de Setiembre de 1863:

Que pasado todo al Consejo de Estado, y resultando vicios sustanciales en la tramitacion del expediente, de conformidad con lo informado por el mismo Consejo en pleno, tuve á bien por mi Real decreto de 14 de Diciembre de 1864 declarar mal formada la competencia y no haber lugar á decidirla:

Que devueltos los autos al Juzgado respectivo, han sido subsanadas por estas las irregularidades que aparecian, invocando ahora la Autoridad judicial, como fundamentos de su competencia, la ley de 17 de Julio de 1836 sobre expropiacion forzosa por causa de utilidad pública, la materia criminal sobre que versa la querrela entablada y la decision dictada en 24 de Julio de 1863 con motivo de competencia entre el Gobernador de la provincia de Tarragona y el Juez de primera instancia de Reus:

Que el Gobernador, conforme con el Consejo provincial, volvió á insistir en su requerimiento fundándose en la Real orden de 19 de Setiembre de 1845; en el reglamento de 27 de Julio de 1853, y en la decision de otra competencia análoga dictada en 9 de Julio de 1862, de todo lo cual ha resultado el presente conflicto:

Visto el art. 54, párrafo primero del reglamento de 25 de Setiembre de 1863 para la ejecucion de la ley de Gobiernos de provincia, segun el cual los Gobernadores no pueden suscitar contienda de competencia en los juicios criminales, á no ser que el castigo del delito ó falta haya sido reservado por la ley á la Administracion, ó cuando en virtud de la misma ley deba decidirse por la Autoridad administrativa alguna cuestion previa de la cual dependa el fallo que los Tribunales hayan de pronunciar:

Visto el art. 1.º de la Real orden de 19 de Setiembre de 1845 en que se dispone que ningun camino ni obra pública en curso de ejecucion se detenga ni paralice por las oposiciones que bajo cualquier forma puedan intentarse con motivo de los daños y perjuicios que al ejecutar las mismas obras se ocasionen por la ocupacion de terrenos, excavaciones hechas en los mismos, extraccion, acarreo y depósito de materiales y otras servidumbres á que están necesariamente sujetas, bajo la debida indemnizacion, las propiedades contiguas á las obras públicas:

Vistos los artículos 30 y 31 de la instruccion de 10 de Octubre de 1845, que confirman lo dispuesto en la Real orden que acaba de citarse, añadiendo que el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por la ejecucion de las obras públicas solo podrá solicitarse ante el Jefe político respectivo:

Vistos los artículos 5.º y 6.º del Real decreto de 23 de Setiembre de 1846, que encomienda á los mismos Jefes políticos la correccion de las faltas que puedan cometerse por los empleados, dependientes, empresarios y contratistas de obras públicas:

Visto el art. 83, párrafo sexto de la ley de 25 de Setiembre de 1863, que entre los asuntos cuyo conocimiento y decision corresponde á los Consejos provinciales, como Tribunales contenciosos-administrativos, señala para el caso en que lleguen á ser contenciosas las cuestiones relativas al resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por las obras públicas:

Considerando:

1.º Que la querrela criminal entablada por don Cirilo Bahía se funda únicamente en el hecho de haberse extraído, sin su permiso, cierta cantidad de piedra con destino á una carretera en construccion:

2.º Que por esta última circuns-

tancia, así como por la de ser contiguas á la obra las fincas de donde la piedra se extrajo, son aplicables al caso presente las prescripciones de la Real orden de 19 de Setiembre de 1845 y demás disposiciones que establecen ciertas servidumbres necesarias en favor de las obras públicas bajo la debida indemnizacion:

3.º Que siendo indispensable, por lo tanto, calificar anticipadamente la legitimidad de la extraccion verificada, y correspondiendo esta facultad á la Administracion, es evidente que existe, en el caso actual, una cuestion previa al juicio criminal, de cuya resolucion depende el fallo que los Tribunales hubieran de pronunciar en su dia;

Conformándome con lo consultado por el Consejo de Estado en pleno,

Vengo en decidir esta competencia á favor de la Administracion.

Dado en Palacio á diez y ocho de Junio de mil ochocientos sesenta y seis --Está rubricado de la Real mano.--El Presidente del Consejo de Ministros, Leopoldo O'Donnell.

(Gaceta del 3 de Julio.)

MINISTERIO DE LA GUERRA.

REALES DECRETOS.

Conformándome con lo propuesto por mi Ministro de la Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Ministros,

Vengo en decretar lo siguiente:

Art. 1.º Se suprime el distrito militar de Extremadura.

Art. 2.º La Capitanía general de Andalucía comprenderá en lo sucesivo todo el territorio que en la actualidad le pertenece y el que componia la de Estremadura.

Dado en Palacio á dos de Julio de mil ochocientos sesenta y seis.--Está rubricado de la Real mano.--El Ministro de la Guerra, Leopoldo O'Donnell.

Conformándome con lo propuesto por mi Ministro de la Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Ministros,

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo único. Los territorios de las Capitanías generales de Navarra y provincias Vascongadas formarán en lo sucesivo un solo distrito militar.

Dado en Palacio á dos de Julio de mil ochocientos sesenta y seis.--Está rubricado de la Real mano.--El Ministro de la Guerra, Leopoldo O'Donnell.

(Gaceta del 3 de Julio.)

GOBIERNO DE LA PROVINCIA de Córdoba.

Núm. 1239.

Seccion de Fomento.—Minas.

D. Antonio de Ariza, vecino de esta capital, de profesion propietario, de 48 años de edad, habitante en la calle de Santa Marta, núm. 25, á nombre de la Sociedad Fusion carbonífera y metalífera de Belméz y Espiel, residente en Madrid, ha presentado á la 1 de la tarde del dia 14 de Julio de 1865 una solicitud de registro de tres pertenencias de la mina titulada *La Corona*, de mineral plomizo, sita en la dehesa de los Chirineiros y cerro de las Minillas, terreno de don Gabriel Hernandez, término de Fuente Obejuna, lindante á N. cerro de las Erillas, á E. camino de las Canalejas, á S. cerro Carboneras y dicho camino, y á O. llano de las Chozas, cuyo mineral se propone descubrir dentro del plazo legal.

La designacion que hace es la siguiente:

Se tendrá por punto de partida el determinado por tres visuales: una de 180° 30' á la cúspide del cerro Redondo, otra de 319° 30' á la del titulado La Carabuela de Piconillos, y otra de 80° á la de la torre de los Rubios. Brújula de notacion directa. Desde él y con rumbo á S. 180°, se medirán 102 metros 50, de primera á segunda E. 270° 300, de segunda á tercera N. 0° 200, de tercera á cuarta O. E. 90° 300, y de cuarta al punto de partida S. 180° 97 metros 50 Segunda pertenencia. De primera á quinta O. E. 90° 300 metros, de quinta á sexta N. 0° 200, de sexta á cuarta E. 270° 300. Tercera pertenencia. De sexta á sétima O. E. 90° 300 metros, de sétima á octava S. 180° 200, y de octava á quinta E. 270° 300 metros.

Ha consignado al mismo tiempo la cantidad de 30 escudos.

Y habiéndole concedido licencia para calicatas, por decreto de hoy, he dispuesto la admision de la referida solicitud, salvo mejor derecho, y que se anuncie al público en cumplimiento al art. 23 de la ley de 6 de Julio de 1859, y á los efectos que previene el 24 de la misma.

Córdoba 26 de Junio de 1866.—El Gobernador, Joaquin de Medina Rodriguez.

Núm. 1240.

El Excmo. Sr. Ministro de la Gobernacion con 16 de Junio último, me comunica la Real orden que sigue:

«Habiendo llegado á conocimiento de S. M. la Reina (q. D. g.) que en algunos pueblos de la provincia de los que se hallaban invadidos por

la epidemia reinante el año próximo pasado, los Alcaldes respectivos concedieron licencia para ausentarse á maestros y maestras de primera enseñanza, contrariando así las disposiciones vigentes que marcan sus deberes á los funcionarios públicos en tan aflictivas circunstancias, á fin de que su ejemplo sirva para inspirar confianza y calmar en lo posible la natural agitacion de los ánimos; S. M. ha tenido á bien mandar que prevenga V. S. á los Alcaldes de esa provincia, que en lo sucesivo se abstengan de conceder semejantes autorizaciones. De Real orden lo digo á V. S. para los efectos correspondientes.»

Lo que he dispuesto se inserte en este periódico oficial, á fin de que por los Alcaldes de los pueblos de esta provincia se observe su exacto cumplimiento.

Córdoba 6 de Julio de 1866 --
El Gobernador, Joaquin de Medina Rodriguez.

CONSEJO DE ESTADO.

REAL DECRETO.

Doña Isabel II, por la gracia de Dios y la Constitucion de la Monarquía española, Reina de las Españas. A todos los que las presentes vieren y entendieren, y á quienes toca su observancia y cumplimiento, sabed: que he venido en decretar lo siguiente:

«En el pleito que pende ante el Consejo de Estado en primera y única instancia, entre partes, de una el Licenciado D. German Gamazo, en nombre de D. Fernando Heredia y consocios, vecinos de esta corte, demandantes; y de la otra la Administracion general del Estado, representada por mi Fiscal, demandada; sobre revocacion ó subsistencia de la Real orden de 21 de Diciembre de 1864, expedida por el Ministerio de Fomento, en virtud de la cual se desecharon varias partidas de la tasacion de un terreno expropiado para la construccion del Canal de Isabel II.

Visto:

Vistos los antecedentes, de los cuales resulta:

Que en el año de 1853, antes de formularse el proyecto definitivo del depósito de aguas del Campo de Guardias, y aun de fijarse el punto donde hubiera de ejecutarse la obra, tuvo la Direccion del Canal necesidad de construir talleres para las operaciones auxiliares de los trabajos, y al efecto adquirió en arrendamiento varias tierras contiguas al mismo Campo de Guardias, previos los oportunos convenios:

Que D. Fernando Heredia, que en union de D. Francisco Catarineu, D. Manuel Zavala y D. José Subiela, habia comprado en 28 de Julio de 1858 algunos de los terrenos de los

expresados, acudió con ellos en el siguiente año de 1859 al Ministerio de Fomento pidiendo que se fijaran con exactitud los verdaderos lindes de un trozo de terreno de los referidos, situado entre los de la sociedad de los Pozos de la Nieve y el camino de Amanuel; y respecto al trozo de terreno sito entre la carretera de Francia y el camino de Fuenarral, y que perteneció á D. José Nogales, que se les devolviese, procediéndose á la tasacion y medicion de la parte ocupada:

Que pasada la reclamacion á informe del Consejo de Administracion del Canal, y oido tambien el parecer del Consultor del expresado Ministerio, se dictó la Real orden de 7 de Noviembre de 1859, que dispuso que sin perjuicio de que el expediente continuase su instruccion para resolver lo que hubiera lugar, se procediera por el Consejo de Administracion del Canal á la devolucion de la parte de terreno que fué de Nogales, y no hubo necesidad de expropiar, indemnizando á los reclamantes, con sujecion al contrato de arriendo celebrado con aquel, que tácitamente tenian aceptado, lo que á prorata les correspondiera desde el dia en que adquirieron su propiedad hasta el de la entrega, procediendo por último al justiprecio ó indemnizacion con arreglo á la ley, de la parte del mismo terreno definitivamente expropiado:

Que en cumplimiento de lo dispuesto en la referida Real orden, y á fin de proceder al justiprecio ó indemnizacion, con arreglo á la ley, del terreno definitivamente expropiado, la parte de Heredia nombró como perito al Arquitecto D. Luis Antonio Fonek, y la Direccion facultativa del Canal designó al Ayudante de Obras D. José Prieto; pero no habiendo conformidad en sus respectivas tasaciones, tuvo precision el Juez de primera instancia del distrito del Norte de nombrar tercer perito en discordia al Arquitecto D. Alejandro Sureda:

Que el perito del Canal manifestó que la forma del terreno en cuestion es de un triángulo irregular, dividido en tres partes, señaladas en el plano formado al efecto con las letras A, B, C, constando la superficie del trozo intermedio, señalado con la letra B, que era el que tomaba el Canal y ocupó con el acueducto, de 3.912 piés cuadrados; y en virtud de las razones que alegaba apreció el pié superficial del terreno expropiado en 2 y cuarto reales, y el demérito de dividir el terreno á pesar de las ventajas que por otra parte reportaba, en 1.937 rs. 70 cénts, que venia á ser el 20 por 100 del importe del terreno expropiado; agregando por último á estas cantidades el 3 por 100 legal, de lo que resultó un total de 11.074 reales 11 cénts:

Que el perito de Heredia dijo en

su primera certificacion: que el trozo de terreno señalado con la letra A quedaba tan reducido, que no se prestaba para distribucion regular de una casa; y de ahí la imposibilidad para su venta; y que aun en el caso de poderse enajenar, necesariamente habia de ser con grande perjuicio á los intereses de los propietarios, y que el trozo C es el de mejor superficie y en disposicion de dársele la aplicacion que se desee; mas que careciendo de las servidumbres que necesita, se encuentra completamente inutilizado para sus dueños; por todo lo cual informó que la Administracion del Canal debia adquirir todo el solar objeto de la controversia; pero instado despues á ampliar su certificacion, reprodujo las consideraciones expuestas, y á los 5 rs. en que tasó el pié de sitio de los 3.912 piés que comprende el solar ocupado, agregó el demérito que resultaba de la ocupacion parcial y division de la propiedad en la parte que no fué preciso sujetar á expropiacion, á fin de que se abonase su menor valor como daños y perjuicios indemnizables, fijando la valoracion de todo en junto en la cantidad de 144 717 rs 9 cénts:

Que el tercer perito don Alejandro Sureda, haciéndose cargo del valor de la tierra expropiada, la tasó á razon de 4 rs. el pié superficial:

Que por otra parte, promovida por Heredia y consortes demanda de reivindicacion ante los Tribunales ordinarios, fué resuelta por sentencia de vista, absolviendo al Consejo de Administracion del Canal de la expresada demanda, reservando sin embargo á los reclamantes su derecho respecto á la indemnizacion con arreglo á la ley general de expropiacion forzosa por causa de utilidad pública, del terreno ocupado, y extendiendo esta reserva á indemnizacion de daños y perjuicios:

Que á consecuencia de la reclamacion propuesta ante el Ministerio de Fomento por D. Fernando Heredia sobre la tasacion del perito, y despues de oirse al Presidente del Canal y al Consultor del mismo Ministerio, se mandó que el referido perito puntualizara y completase la tasacion, como lo hizo, apreciando el demérito del trozo C en un real pié, y en medio real el del trozo señalado con la letra A:

Que practicadas estas diligencias, recayó la Real orden reclamada de 21 de Diciembre de 1864, por la que.

Vista la tasacion reformada por el perito tercero D. Alejandro Sureda, así como lo expuesto por los interesados y por el Abogado consultor, de todo lo cual resulta:

1.º Que se hallan los reclamados conformes en la cantidad en que se aprecia el demérito que sufre la parte lindante con la carretera y se señala con la letra A, así como con

el precio fijado al trozo expropiado letra B:

2.º Que la tasacion hecha del trozo letra C la fija el expresado perito como demérito, y los dueños la pretenden elevar al precio de venta como de inútil aprovechamiento, por quedar encerrado dicho trozo entre el canal y los terrenos limítrofes:

3.º Que se fija además por el perito el abono de un 6 por 100 como réditos del capital que representa todo el terreno desde que se ocupó en 28 de Julio de 1858 hasta la fecha, y el de igual rédito ó interés de un préstamo de 19.000 rs. durante tres años que los reclamantes lo tomaron bajo la garantía del terreno en cuestion:

Considerando, en cuanto á lo reclamado respecto del terreno letra C, por una parte, que la Administracion no puede ni debe adquirir terrenos que no necesita para las obras, y por otra que con el demérito de un real por pié fijado por el perito, que asciende á 20.685 reales, con mas el 3 por 100 de la ley, pueden los interesados abrirse el paso interrumpido por los terrenos limítrofes exentos hoy de edificacion:

Considerando, en lo que hace relacion al rédito del capital que representa todo el terreno desde que se ocupó hasta su abono, y al del préstamo que sobre la finca tomaron los reclamantes; en primer lugar, que en los artículos 7.º de la ley y 9.º del reglamento de expropiacion, aunque se mandan abonar genéricamente los daños y perjuicios que ella cause, se determina claramente que en las fincas que hayan de expropiarse *solo en parte* se tenga en cuenta el demérito que pueda resultar de la ocupacion parcial y division de la propiedad en lo que no sea preciso sujetar á la expropiacion, lo cual ocurre en el presente caso; y en segundo lugar, que si se admitiese la teoría de pago de réditos del capital representado por los terrenos y de los préstamos obtenidos sobre estos, vendria á darse el caso de conceder dos réditos sobre un mismo capital, que duplicaban su producto; abusiva interpretacion combatida ya por una ejecutoria civil, y no sancionada respecto á ninguno de ambos extremos por acto alguno de la jurisprudencia administrativa:

Se resolvió:

1.º Que se abonara Heredia y consocios la cantidad de 4.138 rs. señalada como demérito del trozo letra A, con el 3 por 100 de la ley, que importa 124 rs. 14 céntimos, con cuyas partidas se hallan conformes:

2.º Que asimismo se les abonaran los 15.648 rs. en que fué tasado el terreno expropiado letra B, con el 3 por 100 de ley, que asciende á 469 reales 44 céntimos, y los honorarios del perito, que son 2.500 rs.:

3.º Que por lo relativo al ter-

reno letra C se les abonase como demérito los 20. 685 rs. fijados por el perito, con el 3 por 100 de ley, que asciende á 620 rs. 55 cénts., y si los interesados se negasen á recibir estas sumas; se consignarán en la Caja general de Depósitos, con arreglo á lo dispuesto en el art. 13 del reglamento de 27 de Julio de 1853:

4.º Que se declaren improcedentes y fuera de abono las partidas reclamadas por los interesados, y comprendidas por el tercer perito en su tasacion como interés del capital que representa todo el terreno y el préstamo tomado bajo su garantía:

Vista la demanda que el Licenciado D Manuel Silvela, en nombre de los interesados, presentó ante el Consejo de Estado, solicitando que se abonara á sus representados lo que cueste habilitar la faja accidental del terreno en cuestion de servidumbres necesarias para la edificacion; que asimismo se les abone los intereses de todo el capital que los tres pedazos de tierra representan, á contar desde el dia 28 de Julio de 1858, y los del préstamo de 19.000 rs. tomados sobre el terreno litigioso:

Vista la contestacion de mi Fiscal pidiendo que la Sala se sirva consultar la absolucion de la mencionada demanda y la confirmacion de a Real orden por la misma reclamada, á ménos que estimando fundadas las objeciones que hace sobre la cuestion de competencia, crea y consulte que procede la anulacion del acto administrativo y la renision de las partes ante la Autoridad judicial:

Vistos el escrito que en tal estado presentó, en sustitucion del Licenciado Silvela, el de igual clase Don German Ganazo, mostrándose parte, y pidiendo por un otrosí que se recibiese el pleito á prueba; y el auto de la Seccion de lo Contencioso en que despues de tenerlo por parte en el estado en que se hallaban los autos, acordó que pasasen los mismos en estado al Consejero Ponente:

Visto el auto de la misma Seccion en que despues de declarada conclusa la discusion escrita, acordó que de la vista resultaria la providencia que correspondiera acerca del referido otrosí de la parte actora:

Vista la ley de 14 de Julio de 1836, sobre enajenacion forzosa por causa de utilidad pública:

Visto el reglamento para su ejecucion de 27 de Julio de 1853, cuyo art 9º dice en su párrafo segundo: «Al verificar la tasacion de las fincas que solo deben ser expropiadas en parte, se tendrá en cuenta el demérito que pueda resultar de la ocupacion parcial y division de la propiedad en la parte que no sea preciso sujetar á la expropiacion, á fin de abonar su menor valor como daños y perjuicios indemnizables:»

Vista la seccion segunda de dicho reglamento, que trata de la ocupa-

cion temporal, y sus artículos 26 y 27 que dicen: «Si la tasacion de las fincas contiene faltas contrarias á lo dispuesto en el art. 9.º de este reglamento, ú otras que minoren el valor que los dueños atribuyen á su propiedad, podrán los mismos reclamar de la operacion por la via gubernativa hasta obtener la decision del Gobierno, y contra esta entablar la correspondiente demanda por la via contencioso-administrativa.

«El mismo recurso puede tener lugar en los casos de ocupacion temporal de terrenos y aprovechamiento de materiales, siempre que en ellos ó en su estimacion se perjudique á los derechos de los interesados:»

En cuanto á la competencia de la Administracion:

Considerando, que los interesados D. Fernando Heredia y consortes imputan á la tasacion faltas que segun ellos minoran el valor que atribuyen a su propiedad, como son no haber considerado la completa inutilizacion para edificar en su faja occidental, ni por consiguiente el derecho al precio total que comprende, conforme á la ley y reglamento; y la Direccion del Banal que los peritos se excedieron de lo preceptuado en dichas disposiciones, en lo respectivo á la ocupacion temporal:

Considerando, que siendo estos casos previstos en los artículos 26 y 27 del citado reglamento, compete resolverlos segun él al Gobierno, y en su tiempo y lugar al Consejo en la via contenciosa:

Considerando, en cuanto al fondo, que son dos los puntos que abraza en esta via contenciosa la reclamacion de don Fernando Heredia y consortes: primero, la exactitud ó inexactitud de la tasacion en lo respectivo á la indemnizacion de perjuicios por la parte occidental del terreno que no ha sido expropiado; segundo, la procedencia ó improcedencia del abono de 6 por 100 á los propietarios sobre el capital que representaba todo el dicho terreno desde el dia de la ocupacion hasta la fecha, y el de los intereses de un préstamo tomado sobre él por los mismos dueños:

Considerando, en cuanto al primer punto, que los peritos, con especialidad el tercero en discordia, explicaron perfectamente que la faja occidental quedaba cerrada por los cuatro vientos, siendo este, segun se deduce de sus declaraciones, el único demérito que le señalan, é infiriéndose por lo mismo que habiendo apreciado el demérito en un real por pie, ó sea en la cantidad de 20.685 rs., debe entenderse que este cálculo equivale á lo que podria costar á los dueños adquirir servidumbres sobre cualquiera de las propiedades que cierran el terreno, ó á la pérdida que podrian sufrir enajenándolo, que es lo único á que tienen derecho con arreglo á la ley y al art. 9.º del reglamento, y

no al pago de su valor total como si hubiera sido expropiado:

Considerando, en cuanto al segundo punto, que declara de utilidad pública la obra del Canal, adquirió derecho la Direccion á la ocupacion temporal del terreno, en cuyo caso lo habrian tenido los dueños á los beneficios que señala el art. 22 del reglamento de 27 de Julio de 1853; pero que sustituido al trámite en él fijado para dicha ocupacion el arrendamiento por convenio mútuo, mediante cierto precio, solo á su pago quedó obligada la Direccion por todo el tiempo que duró la ocupacion:

Considerando que en conformidad con lo que queda expuesto, y verificada la expropiacion de la parte necesaria para el Canal, se mandó en Real orden de 7 de Noviembre de 1859 que se pusiese el terreno restante á disposicion de los dueños, indemnizándoles, con sujecion al contrato de arriendo, de lo que á prorata les correspondiese desde el dia en que adquirieron la propiedad hasta el de la entrega:

Considerando que este medio de indemnizacion, que nació del contrato y fué confirmado por la citada Real orden consentida por las partes, hace improcedente el abono del 6 por 100 sobre el precio de la finca, señalado por los peritos por todo el tiempo de la ocupacion:

Considerando que es del mismo modo improcedente el pago de intereses que igualmente señalan los peritos sobre la cantidad de 19.000 rs. que D. Fernando Heredia y consortes tomaron en préstamo, porque de este modo resultarían pagadas dos rentas por el propio terreno, una la cantidad estipulada por su arrendamiento, y otra los intereses del préstamo:

Considerando que reunidos en el expediente gubernativo y en los autos cuantos datos son necesarios para resolver las cuestiones pendientes, es improcedente el recibimiento á prueba:

Conformándome con lo consultado por la Sala de lo Contencioso del Consejo de Estado en sesion á que asistieron D. Domingo Rniz de la Vega, Presidente, D. Antonio Escudero, D. Manuel García Gallardo, don Santiago Otero y Velazquez, D. Pedro Sabau, el Conde de Velarde, don Pablo Jimenez de Palacio, D. Constantino Ardanáz y D. José Elduayen.

Vengo en declarar no haber lugar al recibimiento á prueba solicitado por D. Fernando Heredia y consortes, y en confirmar la Real orden contra la cual se entabló la demanda, absolviendo de ella á la Administracion; sin perjuicio del derecho de los referidos al pago de la renta estipulada en el contrato de arriendo, con sujecion á lo dispuesto en la otra Real orden de 7 de Noviembre de 1859.

Dado en Palacio á 24 de Abril de

mil ochocientos sesenta y seis.--Está rubricado de la Real mano.--El Presidente del Consejo de Ministros, Leopoldo O'Donnell.»

Publicacion.—Leído y publicado el anterior Real decreto por mi el Secretario general del Consejo de Estado, hallándose celebrando audiencia pública la Sala de lo Contencioso, acordó que se tenga como resolucion final en la instancia y autos á que se refiere; que se una á los mismos, se notifique en forma á las partes y se inserte en la Gaceta. De que certifico.

Madrid 3 de Mayo de 1866.—Pedro de Madrazo.

(Gaceta del 3 de Julio.)

AYUNTAMIENTOS

Núm. 1238.

Alcaldía constitucional de Lucena.

D. Antonio Cabellos de Oropesa y Castaños, Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento constitucional de esta ciudad.

Hago saber: que concluido el repartimiento de la contribucion territorial asignada á la misma para el año económico de 1866 á 67, he dispuesto se exponga al público por término de ocho días, contados desde que aparezca este anuncio inserto en el *Boletín oficial* de la provincia, para que los inscritos en él puedan reconocer sus respectivas cuotas y reclamar cualquier agravio que en la aplicacion del impuesto se les pudiese haber inferido; en la inteligencia que trascurrido el período prefijado sin producir gestion alguna en el sentido indicado, serán desestimadas las que aduzcan por mas justificadas que parezcan.

Dado en Lucena á 4 de Julio de 1866.—Antonio Cabellos de Oropesa.—Por mandado de S. S., Pedro F. Laita.

Núm. 1242.

Alcaldía constitucional de Montilla.

D. José Maria Repiso, primer teniente Alcalde interino de esta ciudad.

Hago saber: que concluido el repartimiento de la contribucion territorial de la misma, correspondiente al año económico de 1866 á 1867, se halla de manifiesto en la Secretaría de este Ayuntamiento, por término de 8 dias, contados desde esta fecha, dentro de los cuales podrán los contribuyentes en él contenidos presentarse á examinar sus cuotas y reclamar de los agravios que adviertan; apercibidos, que trascurrido dicho plazo, no seran oidos, y les parará el perjuicio que haya lugar.

Montilla 5 de Julio de 1866.—José Maria Repiso --Por mandado de S. S., Antonio Cuello, Secretario.

Imprenta de R. Rojo y Comp.ª
Arco-Real 49.